

DECLARACIÓN DE INTENCIONES ENTRE LA CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA (REPÚBLICA DE COLOMBIA) Y LA AGENCIA DE PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL FRAUDE Y LA CORRUPCIÓN DE LA COMUNITAT VALENCIANA (REINO DE ESPAÑA) CON EL OBJETO DE REALIZAR ACCIONES DE INTERÉS MUTUO EN SUS RESPECTIVAS COMPETENCIAS

REUNIDOS

De una parte, la Sra. Ligia Stella Chaves Ortiz, Contralora Departamental del Valle del Cauca de la República de Colombia (en adelante La Contraloría), quien actúa en nombre y representación, elegida por la Honorable Asamblea Departamental del Valle del Cauca para el periodo 2022-2025, como consta en el Acta No.002-2022 Sección Plenaria Extraordinaria de Enero 12 de 2022, debidamente posesionada, facultada para celebrar el presente Acuerdo, en ejercicio de la competencia otorgada en el numeral 3, literal b del artículo 11 de la Ley 80 de 1993.

De otra parte, el Sr. Joan Antoni Llinares Gómez, Director de la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana del Reino de España (en adelante Agencia Valenciana Antifraude), quien interviene en su nombre y representación en virtud del nombramiento realizado por Resolución de la Presidencia de las Corts Valencianes de 29 de mayo de 2017, previa elección por el Pleno (*Diari Oficial de la Generalitat Valenciana* núm. 8052, de 31 de mayo de 2017).

EXPONEN

I.- Que la Contraloría Departamental del Valle del Cauca fue creada mediante la Ordenanza N° 37 del 29 de Abril de 1924 de la honorable Asamblea Departamental del Valle del Cauca, como una entidad de carácter técnico con autonomía administrativa y presupuestal, encargada de ejercer vigilancia a la gestión fiscal de la administración departamental y de las alcaldías, de los particulares o entidades que manejen fondos (recursos públicos) o bienes del Departamento. Su función es indilgada por la Constitución Política Colombiana de 1991 en sus artículos 267 y 209, el Acto Legislativo 04 de 2019 y el Decreto Ley 403 de 2020.

II.- Que la función de control fiscal por parte de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca se ejerce con el fin de determinar si la gestión fiscal y los resultados de los Sujetos y Puntos de Control, se ajustan a los principios, políticas, planes, programas, proyectos, presupuestos y normatividad aplicables y logran efectos positivos para la consecución de los fines esenciales del Estado; y sin perjuicio de la vigilancia fiscal, para garantizar la defensa y protección del patrimonio público vallecaucano.

III.- Que la Agencia Valenciana Antifraude, creada mediante la Ley 11/2016, de 28 de noviembre, de la Generalitat (BOE núm. 306, de 20 de diciembre de 2016), se configura como entidad pública adscrita a las Corts Valencianes, creada para prevenir el fraude y la

corrupción de las instituciones públicas valencianas y para el impulso de la integridad y la ética pública, así como para fomentar una cultura de buenas prácticas y rechazo del fraude y la corrupción.

IV.- Que también constituye función de la Agencia Valenciana Antifraude colaborar con los órganos competentes en la formación del personal en materia de integridad y ética pública a través de la elaboración de guías formativas y asesoramiento especializado en materia de lucha contra el fraude y la corrupción, así como la prevención y la investigación de posibles casos de uso o destino irregular de fondos públicos y de conductas opuestas a la integridad o contrarias a los principios de objetividad, eficacia y sumisión plena a la Ley y al Derecho.

V.- De acuerdo con el artículo 5 de la Ley de creación de la Agencia, esta puede proporcionar la colaboración, la asistencia y el intercambio de información con otras instituciones, órganos o entidades públicas mediante planes y programas conjuntos, convenios y protocolos de colaboración funcional, en el marco de la normativa aplicable. Con arreglo al artículo 10 de su Reglamento de funcionamiento y régimen interior (DOGV núm. 8582 de 02.07.2019), la Agencia podrá establecer fórmulas de colaboración de cualquier índole con otros órganos de las administraciones, entidades e instituciones públicas, personas físicas y jurídicas, sujetas a su ámbito de actuación o no, con la finalidad de propiciar el intercambio de información y realizar actividades preventivas, formativas o cualesquiera otras que permitan alcanzar objetivos de interés común.

VI.- Que ambos entes públicos se configuran como instrumentos para la prevención, la investigación y erradicación de los actos y prácticas de corrupción que pongan en peligro o realicen un mal uso de los fondos públicos, así como para salvaguardar la integridad y la ética pública, como fines en plena garantía de los derechos de la ciudadanía y de cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

En virtud de lo expuesto, los firmantes acuerdan suscribir esta Declaración de Intenciones de conformidad con los siguientes:

APARTADOS

Primero. Objeto de la Declaración de Intenciones

El objeto de esta Declaración es establecer un marco estable de comunicación y colaboración entre la Contraloría Departamental del Valle del Cauca (República de Colombia) y la Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana (Reino de España), que permita alcanzar los siguientes objetivos de interés común:

- Intercambiar buenas prácticas en materia de prevención y lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la ética pública, la integridad institucional y la

transparencia, y compartir metodologías de trabajo en el marco de las funciones respectivas.

- Realizar acciones y programas conjuntos, y estudios y análisis de riesgos.
- Prestar asistencia recíproca en la capacitación y formación del respectivo personal.
- Establecer acciones para el fortalecimiento de la participación ciudadana e incentivar encuentros de la sociedad civil en favor de los valores que posibilitan el desarrollo sostenible en sus territorios.
- Evaluar conjuntamente desde sus respectivas experiencias la eficacia de los instrumentos jurídicos y de las medidas existentes en materia de prevención y lucha contra el fraude y la corrupción en los ámbitos respectivos.

Segundo. Base jurídica para la suscripción de la Declaración de Intenciones

Este Memorando se suscribe en virtud del artículo 1.4 de la Ley de Acción y de Servicio Exterior del Estado y el artículo 53 de la Ley 25/2014 de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales, que especifican la facultad de las Comunidades Autónomas de firmar Acuerdos Internacionales no normativos con órganos, organismos, entes, Administraciones y personificaciones de un sujeto de Derecho Internacional, dentro del ámbito competencial y observando los principios de unidad de acción en el exterior, lealtad institucional, coordinación y cooperación y servicio al interés general, recogidos en el artículo 3.2 de la Ley de Acción y del Servicio Exterior del Estado, y con respeto a las competencias exclusivas del Estado.

Tercero. Desarrollo a través de protocolos y acuerdos específicos

Los compromisos jurídicos concretos que, a partir de la ejecución de esta Declaración, se pongan de relieve y que sea necesario formalizar, se habrán de concretar si procede, a partir de los correspondientes protocolos de actuación y de los correspondientes acuerdos específicos, el procedimiento de suscripción y el contenido de los cuales se habrá de ajustar a las previsiones normativas en vigor de los respectivos Estados que, en todo caso, requerirán del previo informe del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino de España, conforme dispone el artículo 53.3 de la Ley 25/2014 de Tratados y Otros Acuerdos Internacionales.

Corresponde a la Comisión Mixta de Seguimiento y Control a la que hace referencia el apartado quinto de la presente Declaración elevar a los firmantes de la misma las propuestas concretas de firma de protocolos o acuerdos específicos.

Cuarto. Aspectos económicos

La aplicación y ejecución de la presente Declaración de Intenciones, que incluye todos los actos jurídicos que se pueden dictar en su ejecución y desarrollo, no podrán implicar obligaciones económicas ni para la Contraloría Departamental del Valle del Cauca ni para la Agencia Valenciana Antifraude. Los gastos en los que puedan incurrir los firmantes con

ocasión del presente Memorándum estarán condicionados a la existencia de disponibilidad presupuestaria anual ordinaria, respetando la legislación vigente.

Quinto. Confidencialidad de la información

De manera general, cada uno de los firmantes se compromete a no difundir, bajo ningún concepto, las informaciones pertenecientes a la otra parte a las cuales haya podido tener acceso en ejecución de esta Declaración.

Los firmantes habrán de aplicar las medidas de seguridad adecuadas para el mantenimiento de la confidencialidad de la información que sean aplicables según las previsiones de la legislación vigente en cada momento.

Ambos firmantes se comprometen a que todo el personal que participe en la ejecución de esta Declaración conozca y cumpla el compromiso de confidencialidad regulado por este apartado.

Sexto. Comisión Mixta de seguimiento y control de la Declaración de Intenciones

Para la supervisión, seguimiento y control de esta Declaración y la resolución de las dudas que puedan surgir de su interpretación, y también para la dinamización y coordinación de las acciones de los dos firmantes, se constituye una Comisión Mixta de Seguimiento y Control compuesta por dos representantes de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca y dos representantes de la Agencia Valenciana Antifraude.

Los miembros titulares de la Comisión Mixta de Seguimiento y Control se determinarán mediante adenda a esta Declaración, pudiendo los firmantes designar suplentes en caso de no poder asistir a las reuniones.

La Comisión Mixta de Seguimiento y Control establecerá las reuniones de trabajo pertinentes con la finalidad de cumplir con el objeto de la presente Declaración y podrá invitar a asistir a sus reuniones a las personas técnicas que considere conveniente; estas personas tendrán voz, pero no voto.

Séptimo. Eficacia temporal y duración de la Declaración de Intenciones

Esta Declaración produce efectos desde su firma y tiene una duración de cuatro años, con posibilidad de prórroga, por un periodo de cuatro años adicionales si así lo acuerdan de forma expresa los firmantes de la presente Declaración.

Cualquiera de los dos firmantes puede poner fin a la Declaración en cualquier momento una vez transcurrido el primer año de duración, mediante escrito dirigido a la otra parte. La extinción producirá efectos una vez transcurridos tres meses desde la comunicación de la finalización, sin perjuicio de que se finalicen las actuaciones ya iniciadas que se hayan de llevar a término por razones de interés público.

Octavo. Naturaleza de la Declaración de Intenciones

El presente Memorando no es jurídicamente vinculante ni está sometido al Derecho Internacional. Las diferencias que puedan surgir sobre su interpretación y cumplimiento se resolverán por la Comisión Mixta de Seguimiento y Control prevista en el apartado quinto de esta Declaración.

Noveno. Publicidad y transparencia

Ambos firmantes se comprometen a dar difusión a esta Declaración de Intenciones mediante la publicación en sus páginas web, y si procede en los diarios oficiales correspondientes.

Y en prueba de conformidad se firma electrónicamente.

Ligia Stella Chaves Ortiz Contralora Departamental del Valle del Cauca de la República de Colombia	Joan Antoni Llinares Gómez Director de la Agencia Valenciana Antifraude del Reino de España
---	--

